

**ES CANDIDATA POR UN LUGAR COMO MINISTRA**

# TAPÓ FRAUDES DEL PRI, BUSCA LA SCJN

**Su avance hasta la lista final del Comité Legislativo le permite llegar como una de las aspirantes más fuertes**

OMAR MONTALVO  
GRUPO CANTÓN

**CIUDAD DE MÉXICO.-** En las listas de candidatos a un cargo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra Luz María Zarza, quién además de no contar con una carrera judicial, se ha desempeñado en cargos dónde buscó encubrir los fraudes del exgobernador priísta en el Estado de México, Eruviel Ávila, pero que en el último año se hizo aliado de Morena hasta llegar como diputado federal del Partido Verde.

El registro de Zarza Delgado y su avance hasta las listas finales por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo le permite a la expriísta llegar a las candidaturas de la elección judicial como una de las aspirantes más fuertes.

Durante el gobierno de Eruviel Ávila en el Estado de México (2011-2017) Zarza Delgado como parte del llamado Grupo Atlacomulco, se desempeñó como Consejera Jurídica. En ese sexenio se dieron los fraudes en las elecciones estatales,



· Fue Consejera Jurídica del Edomex en el gobierno de Eruviel

pero también las irregularidades en la construcción de la autopista Toluca-Naucaclpan, las concesiones de obras para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM); y la construcción eterna del Tren Interurbano México-Toluca.

Uno de los casos más polémicos ocurrió cuando se filtraron conversaciones entre directivos de la empresa española OHL y el gobierno mexicano para fijar sobrecostos de construcción y la operación de autopistas concesionadas Viaducto Bicentenario y Cir-

cuito Exterior Mexiquense.

Además, en 2017 se desempeñó como la abogada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando esta fue señalada como parte de la llamada Estafa Maestra. Esta investigación que mantiene impune a los funcionarios involucrados, reveló que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, participaron hasta 128 empresas fantasmas para desviar más de 400 millones de dólares a través de servicios contratados por universidades públicas y otras instituciones.